EXP. CTSSP/063/2024

- - - Colima, Colima a 25 (veinticinco) del mes de septiembre del año 2024 (dos mil veinticuatro), la suscrita C. Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, doy cuenta a los miembros del Comité de Transparencia del oficio SSP/SSO/DSP/243/2024, presentado por la **C. TENIENTE DE FRAGATA I.M.P. ANA KAREN ANDRÉS RODRÍGUEZ, SUBSECRETARIA DE OPERACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA**, en cumplimiento a la **RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL RECURSO DE REVISIÓN RR. PNT/447/2023**, interpuesta en contra del sujeto obligado denominado **Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual se pronuncia sobre la modificación de la respuesta de la Información**, respecto de:

> **"El nombre de todos los integrantes de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos".**

- - **-VISTO** para **RESOLVER** la **confirmación, revocación o modificación** del Acuerdo de Clasificación de la Información realizada por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, y estando debidamente constituido el Comité de Transparencia, presidido por el Lic. Francisco Javier Delgado Betancourt, Subdirector General Jurídico de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, la Secretaria Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y la Jefa del Departamento de Atención Integral de la Subsecretaría de Operaciones, miembros que integran el Comité, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º , 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54, 126, 129, 139 y 143, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, procede a realizar el estudio y análisis de la resolución administrativa que a continuación se presenta, y.-

R E S U L T A N D O

ÚNICO.- Con fecha 24 (veinticuatro) del mes de septiembre del año 2024 (dos mil veinticuatro), se acusó de recibido, el oficio con No. **SSP/SSO/DSP/243/2024,** dirigido al Presidente del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, por parte de la **TENIENTE DE FRAGATA I.M.P. ANA KAREN ANDRÉS RODRÍGUEZ**, Subsecretaria de Operaciones de la Secretaría Seguridad Pública del Estado de Colima, y dentro del cual remite el **Acuerdo de Clasificación de Reserva de Información** debidamente signado, con la finalidad de que este Comité declare procedente **confirmar**, **modificar** o **revocar** dicha clasificación de Información reserva.

C O N S I D E R A N D O S

1. **COMPETENCIA.** Este Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública es el órgano colegiado competente para conocer de la presente determinación de información reservada y confidencial con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1° fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54, 126, 129, 143, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

   El Comité de Transparencia se encuentra integrado por tres miembros que serán el Subdirector General Jurídico de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, la Secretaria Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y la Jefa del Departamento de Atención Integral de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. El Comité sesionará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y aprobará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Subdirector General Jurídico de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario o quien presida el Comité en su ausencia, tendrá voto de calidad.

Los miembros del Comité podrán ejercer sus funciones de manera directa o bien por conducto de los servidores públicos adscritos a su dependencia que al efecto designen corno sus representantes.

2.- ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADA POR LA SUBSECRETRAÍA DE OPERACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

Del estudio del acervo documental y electrónico, así como la cronología y seguimiento administrativo instaurado por el sujeto obligado, se advierte que con fecha de recibido por este comité el día 24 (veinticuatro) del mes de septiembre del año 2024 (dos mil veinticuatro), mediante oficio No. SSP/SSO/DSP/243/2024, signado por la C. TENIENTE DE FRAGATA I.M.P. ANA KAREN ANDRÉS RODRÍGUEZ, SUBSECRETARIA DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, después de haber realizado un análisis administrativo, informa al C. LIC. FRANCISCO JAVIER DELGADO BETANCOURT, Presidente del Comité de Transparencia, de su determinación, mediante Acuerdo de Reserva de la información, manifestando que:

"[...]

ACUERDO

QUE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN RESERVADA LA RELACIONADA CON, EL NOMBRE DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS U HOMÓLOGOS ENCARGADOS DE LA DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, COPIA DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL, CURRÍCULUM Y ANEXOS QUE ACREDITEN SUS GRADOS ACADÉMICOS.

C. TENIENTE DE FRAGATA I.M. P. ANA KAREN ANDRÉS RODRÍGUEZ. SUBSECRETARIA DE OPERACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 4 numeral 1, 24 numeral 2 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, 7 y 8 numeral 1 fracción I y VIII del Reglamento Interior de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en correlación con los numerales 5, 106, 110, 111, 113, 116 y 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima;

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma el 22 de marzo de 2024) establece en su párrafo tercero que "*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias; tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*" Lo que obliga al titular de la Secretaría de Seguridad Pública como autoridad, a realizar una interpretación conforme la ley, preservando en todo momento el principio ***pro persona.***

II. Que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su segundo párrafo que *"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión."* Y en relación a sus fracciones I y II del inciso A, establecen que ese derecho de acceso a la información, tiene como excepción la reserva temporal de información en virtud del interés público, de la vida privada y los datos personales;

III. Que la fracción III, del artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima (11 de mayo de 2024) establece el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión;

IV. En términos del artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para obtener y conocer la información creada, recopilada, administrada, procesada o que por cualquier motivo se encuentre en posesión de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley.

V. Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establece que para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables en la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.

VI. Con exclusión del tratamiento especial que debe concederse a la información confidencial o reservada, toda la información en posesión de los sujetos obligados se considera un bien de carácter e interés público y, por ende, cualquier persona tendrá acceso a ella en los términos y condiciones que establece el presente ordenamiento. La reserva de la información operará temporalmente y de manera excepcional, por razones de interés público.

VII. Por su parte el Artículo 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima refiere que "El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por la presente Ley, de acuerdo a las normas que se plantean para el tratamiento de la información reservada y la confidencial. Los sujetos obligados deberán dictar las determinaciones necesarias para la protección de los datos personales que se encuentren en los documentos que tengan bajo su control y resguardo."

VIII. Así como el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, los sujetos obligados deberán resolver respecto del carácter reservado o confidencial de la información que obre en su poder.

IX. La reserva de información deberá estar debidamente fundada y motivada, conforme lo establece el Capitulo Segundo, párrafo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas con relación al artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, aplicando la "prueba de daño" correspondiente.

X. Con fundamento en el artículo 106 puntos 4 y 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, que disponen que toda la información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones Policiales, órganos desconcentrados y descentralizados se considera reservada, debiendo registrarse clasificarse y tratarse de conformidad con la mencionada Ley y demás disposiciones aplicables; así como también se considera como información reservada aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública o a las Instituciones del Estado y la contenida en las averiguaciones previas, carpetas de investigación, entrevistas, expedientes, los demás archivos o sus soportes en medios electrónicos relativos a la investigación, para la prevención y la investigación de los delitos, las disposiciones

contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las contenidas en los procedimientos en materia de Justicia Penal para Adolescentes y las relacionadas con las faltas administrativas, por el tiempo que determinen las autoridades competentes.

XI. En este mismo sentido el artículo 110 cuarto párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el cual refiere que se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.

Que el objeto del presente acuerdo es reservar lo siguiente: El nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos; cuya divulgación puede generar un daño desproporcionado o innecesario a bienes jurídicamente tutelados, como lo son la vida, salud, seguridad de una persona física, comprometer la Seguridad Pública y contar con un propósito genuino y un efecto demostrable.

De lo anterior se concluye que, al encuadrar con las hipótesis planteadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, a efectos de la clasificación de la información como reservada y con fundamento en los alcances del artículo 110 se expide el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. - Fuente: Con fundamento en el Capítulo II, párrafo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, con relación al Título Sexto capítulo I, artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, La Subsecretaria de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública clasifica como información reservada, el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, cuya divulgación puede generar un daño desproporcionado o innecesario a bienes jurídicamente tutelados, como lo son la vida, salud y seguridad de una persona física, comprometer la Seguridad Pública y contar con un propósito genuino y un efecto demostrable.

SEGUNDO.- Justificación: El nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, representa información que de abrirse al conocimiento de la ciudadanía, comprometería las funciones de seguridad pública que las instituciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentra obligadas a garantizar en coordinación con los Municipios y la Federación; esto es así, debido a que la información que se solicita se entregaría el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, es decir, personal en funciones de seguridad pública y que cada uno ellos, en el ámbito de su competencia, realiza para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, colocando a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en un estado de

vulnerabilidad la difusión de tal información, respecto de datos sensibles del personal que es parte de la estructura orgánica de esta institución Policial para atender las obligaciones enmarcadas en el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Situación por la que se considera reservar la información que se solicita, por actualizarse los supuestos previstos por el artículo 116 fracciones I, II, IV, IX y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima (LTAIPEC), así como lo previsto en el Capítulo Quinto, párrafo décimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.

Ello es así por los siguientes motivos, razones o circunstancias especiales:

Artículo 116 fracciones I, II, IV, IX y XI LTAIP

I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.
De un análisis de la información solicitada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, Distrito Federal, los Estados y Municipios, lo que comprende la prevención de delitos, investigación y persecución, así como la sanción de las infracciones administrativas, tal como se describe a continuación:

> *"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [...]*
>
> La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. *[...]*
>
> Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Publico y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Publica, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: *[...]"*

De lo que se desprende que la Secretaría de Seguridad Pública tiene como objetivo regular la función de Seguridad Pública en el Estado, así como establecer y desarrollar las bases de aplicación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de coordinación entre el Estado y los Municipios.

Ya que la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y de los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz, que comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas y la reinserción social del individuo, en las respectivas competencias establecidas en las Constituciones Federal y la Particular del Estado.

En ese sentido, la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado al entregar el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, la exposición de la identidad y formación del personal jurídico compromete la integridad de los procesos judiciales. Si las partes involucradas en un caso conocen la identidad de los abogados y asesores legales con que cuenta la institución policial, esto puede influir en su comportamiento y las decisiones que tomen, creando un ambiente de presión potencial por grupos de la delincuencia, la información relacionada con la formación y experiencia profesional de los servidores públicos debe ser protegida bajo principios de protección de datos sensibles. Divulgar información que pueda ser utilizada para identificar o vulnerar a estos profesionales puede ser considerado una falta grave en términos de derechos humanos y protección legal que afecta directamente a la privacidad de datos personales del personal jurídico que es parte de la estructura orgánica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con funciones en la prevención y persecución de

delitos, entre otras, no obstante, es crucial seguir las normativas y políticas establecidas para la protección del personal jurídico y su información personal, lo cual está alineado con los principios de administración pública y derecho a la privacidad del personal de las instituciones de seguridad pública adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado.

Máxime lo anterior, al hacerse del conocimiento público el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos del personal encargado de la representación y asesoría jurídica adscritos a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como institución, tenemos la obligación legal y ética de proteger la información que pueda poner en peligro a nuestro personal y a la confianza de la ciudadanía en la policía. La transparencia es importante, pero también lo es garantizar la seguridad de quienes desempeñan funciones críticas en el sistema de justicia.

II. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Supuesto que se actualiza, al hacerse entrega del nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos del personal que forma parte de la estructura orgánica adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, toda vez que el personal en funciones jurídicas administrativas, forman un conglomerado de personas, que unidas entre sí abonan al cumplimiento de los fines de la seguridad pública, y que por el solo hecho de prestar sus servicios en una institución de seguridad pública, pone en riesgo su vida, seguridad y salud física, ante un ataque dirigido a las instalaciones de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como represalia por las acciones implementadas a garantizar la seguridad pública, pues al ser dichas unidades administrativas, un ente gobierno, sus domicilios son del conocimiento público, por lo que los hace ubicables e identificables ante grupos de la delincuencia organizada, lo que se vería mermado con la capacidad de reacción que al momento del hecho pueda acontecer.

IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Recordemos que la prevención del delito comprende estrategias y medidas que buscan la reducción del riesgo de que ocurran delitos, así como sus efectos dañinos potenciales en los individuos y la sociedad, incluyendo el temor al delito, mediante la intervención para influir en sus múltiples causas; luego entonces, al hacer entrega del nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, podría comprometer la seguridad de estos profesionales. Ellos trabajan en un entorno donde la protección de su integridad física y su vida es vital, ya que pueden ser objeto de represalias o amenazas debido a su función dentro del sistema policial de seguridad pública, afectando con ello las estrategias de reducir el riesgo de que se cometan delitos y sus efectos perjudiciales en las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia; ya que la divulgación de la información alentaría la planeación y ejecución de hechos delictivos, por lo que podría obstruir la persecución de los probables hechos constitutivos de delitos.

IX. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que por su publicación pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores público o de terceros;

En este sentido, el supuesto normativo del artículo 116 fracción IX de la LTAIPEC se actualiza, toda vez que, el solicitante requiere, a través de solicitud de información, promovida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado "Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima"; solicitud a través de la cual, requiere conocer el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, y que como ya se manifestó en el supuesto previsto en la fracción II del artículo en cita, toda vez que el personal jurídico administrativo, forman un conglomerado de personas, que unidas entre sí abonan al cumplimiento de los fines de la seguridad pública, y que por el solo hecho de prestar sus servicios en una institución de seguridad, pone en riesgo su vida, seguridad y salud física, ante un ataque dirigido a las instalaciones de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales.

Asimismo, es importante señalar que existen leyes en materia de Seguridad Pública en las que especifican la información que debe ser considerada como reservada, por su parte la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima establece que información deberá considerarse como reservada (14 de noviembre de 2020), en los artículos 57 y 106 numerales 4 y 5, tal como se demuestra a continuación:

Artículo 57, apartado 1, fracción XXVII.- Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio, a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión.

Artículo 57, apartado 2, fracción XXXIII.- Revelar asuntos secretos o información reservada de los que tenga conocimiento en razón de su empleo, encargo o comisión;

Artículo 106.- Toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones Policiales, órganos desconcentrados y descentralizados se considera reservada, debiendo registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones aplicables. [...]

Para efectos de la presente Ley se considera información reservada, sin necesidad de emitir el acuerdo respectivo, la siguiente:

I. La clasificada con este carácter por la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II. Aquella cuya divulgación implique la revelación de procedimientos, métodos fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública o el combate a la delincuencia, así como la integración de los resultados de las evaluaciones de control y confianza;

III. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública o a las instituciones del Estado; la que sea producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la Constitución y las disposiciones legales correspondientes.

Y de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

> ***XXI.-*** *Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;*

Artículo 110.- Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.

La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga. [...]

Artículo 115 párrafo segundo: Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

Es por todo lo anterior que, bajo una interpretación conforme el principio ***pro persona*** de la norma, pues acorde con lo establecido en el artículo 6 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la mayoría de los derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información no es absoluto, si no que se encuentra sometido a un régimen reducido de excepciones para el caso de que su ejercicio amenace valores o bienes jurídicos igualmente protegidos por el derecho, como lo son la vida, seguridad, salud y el interés público. Y en función de que el bien jurídico que se está tratando de proteger es la vida, la salud y la integridad del personal operativo que realizan funciones de Seguridad Pública dentro del Poder Ejecutivo, existe una justificación racional del derecho del promovente al acceso a la información.

Sirven de apoyo a las consideraciones vertidas en el presente punto las tesis aisladas y jurisprudenciales que a continuación se transcriben:

Décima Época
Núm. de Registro: 2000234
Instancia: Primera Sala Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. VIII/2012 (10a.)
Página: 656

INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; **4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona**; o **5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos**, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: **1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada**; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; **3) averiguaciones previas**; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Época: Novena Época
Registro: 169772
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Abril de 2008
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2ª. XLIII/2008
Página: 733

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados, con

la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general.

Época: Novena Época
Registro: 191967
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XI, Abril de 2000
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y

Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Al respecto, el diverso 114 de la citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Colima dispone que:

> *"Se considerará información reservada aquella que se encuentre sustraída temporalmente del conocimiento público por determinación de los sujetos obligados, misma que podrá declararse en los casos y modalidades establecidas en el presente ordenamiento."*

En razón de lo anterior, así como lo previsto en el Capítulo Quinto, párrafo décimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el precepto 116, fracciones I, II, IV, IX y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima señala lo siguiente:

> *"**Artículo 116.-** Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán emitir lineamientos para clasificar como reservada información que se encuentre a su disposición con motivo del ejercicio de su cargo, o podrán ejercer dicha función por medio de las instancias que se determinen en los reglamentos o acuerdos administrativos que dicten.*
>
> *En todo caso, el acuerdo correspondiente deberá fundar y motivar la reserva, a través de la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 111 de esta ley, cuando la publicación de la información actualice cualquiera de los siguientes supuestos:*
>
> *I. Comprometa la Seguridad Pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*
>
> *II. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;*
>
> *IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*
>
> *XI. Las que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta ley y no la contravengan así como las previstas en tratados internacionales. [...]"*

De lo anterior, se colige que para actualizarse los supuestos de clasificación de referencia, deben acreditarse que **la información comprometa la Seguridad Pública y cuente con un propósito genuino y efecto demostrable, obstruya la prevención o persecución de los delitos con la difusión de la información se puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona y que dicha información sea reservada por una disposición expresa de una ley, sin que contravengan los principios y disposiciones establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como las previstas en tratados internacionales.**

Por lo que dar a conocer el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, puede poner en riesgo la integridad física del personal jurídico adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que ejercen funciones de riesgo relacionadas de manera directa con las personas detenidas, así también, en funciones con la seguridad pública, motivo por el cual es necesario limitar diversos rubros de la información pública para garantizar aspectos legales como la utilización indebida de la información estratégica de dicha institución, salvaguardar la vida de las personas y la estabilidad del Estado; además que ello permitiría el conocimiento por parte de terceros, por lo que al dar esta información se revelaría los nombres de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, la cual es de suma importancia para grupos o personas relacionadas con la delincuencia organizada y en consecuencia se vulnera la integridad personal de un ser humano

por tratarse de un dato vinculado a la estructura orgánica de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva y que los hace identificables pues forman parte de la corporación encargada de hacer frente a las actividades delictivas y responsables de garantizar el orden y la paz pública en la Entidad.

Lo anterior es una forma a través de la cual la delincuencia puede poner en riesgo la integridad física del personal jurídico de las instituciones de Seguridad Pública y del Estado, anular, impedir y obstaculizar la actuación de los servidores públicos que garantizan la seguridad pública en el Estado; pudiendo llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado.

Todo lo anterior, reafirma lo dispuesto en lo previsto en el Capítulo Quinto, párrafo décimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, mismo que a la letra señala:

> **Décimo octavo.** De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.
> Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.
> Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.

Atendiendo al precepto anterior, es de entenderse que dar a conocer la información respecto al nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, siendo este un dato vinculado a la estructura orgánica de la Policía Estatal Preventiva, pone en peligro las funciones que realiza la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tendientes a preservar, resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos, no solo de la ciudadanía, sino también de los servidores públicos que prestan sus servicios al cumplimiento de los fines de la seguridad pública, porque revela datos que puedan ser utilizados para afectar las actividades de las instituciones de seguridad pública adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para atender las funciones que le son encomendadas.

Es por todo lo anterior, que en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se realiza la prueba de daño de la forma siguiente:

PRUEBA DE DAÑO:

Riesgo Real: Dar a conocer el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, es información en poder del Sujeto Obligado Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, porque forma parte de sus bases de datos, en términos de lo dispuesto por los artículos 105 y 106 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima.

Identificable: Al dar a conocer la información respecto al nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y

anexos que acrediten sus grados académicos; la instancia tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor de cada individuo. Por lo que divulgar públicamente el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, es mayor el daño que el interés público de conocer la información de referencia.
Es en estricta necesidad conforme a las disposiciones legales vigentes, reservar dicha información por motivos de seguridad. Es fundamental entender que la protección de la información personal de los integrantes del cuerpo jurídico adscritos a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva es una cuestión de seguridad. Estas personas desempeñan un papel crucial en la justicia y la legalidad, entendemos y valoramos el interés en conocer más sobre el personal jurídico de nuestra institución. Sin embargo, es fundamental considerar la naturaleza del trabajo que realizan. El personal jurídico tiene un rol crucial en el proceso de tratamiento y asesoramiento a las personas detenidas, situación que los hace identificables. Esta labor implica un contacto directo y, en muchos casos, sensible con individuos en situaciones vulnerables y su exposición puede poner en riesgo no solo su vida, sino también la de sus familias. En contextos donde la corrupción y el crimen organizado son amenazas reales, mantener el anonimato de quienes trabajan en la defensa de la ley es una medida necesaria para preservar la integridad del sistema. La transparencia es importante, pero la seguridad de quienes arriesgan su vida por la sociedad debe ser la prioridad. Proporcionar información detallada, como nombres, currículos, cédulas de identificación o títulos profesionales, podría comprometer la seguridad de estos profesionales. Ellos trabajan en un entorno donde la protección de su integridad física y su vida es vital, ya que pueden ser objeto de represalias o amenazas debido a su función dentro del Sistema de Seguridad Pública. Además, como institución, tenemos la obligación legal y ética de proteger la información que pueda poner en peligro a nuestro personal y a la confianza de la ciudadanía en la policía, es fundamental para esta institución proteger y mantener la integridad de nuestro personal jurídico. La transparencia es importante, pero también lo es garantizar la seguridad de quienes desempeñan funciones críticas en el Sistema de Seguridad Pública. La divulgación de información personal y profesional de los miembros del personal jurídico puede poner en riesgo su seguridad y la de sus familias. Estos profesionales, aunque no están en funciones operativas, son parte integral de la estructura orgánica de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva y, si son identificables, podrían ser vulnerables a represalias por parte de individuos detenidos o grupos criminales. Es crucial seguir las normativas y políticas establecidas para la protección información personal, sobre todo resaltando la importancia de cuidar los datos personales del personal que realiza sus funciones dentro de las instituciones de seguridad pública.

Situación que acredita lo dispuesto en el Capítulo Quinto, párrafo vigésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, mismo que a la letra señala:

> **Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Demostrable: En concreto el divulgar públicamente el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica adscritos a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos. La seguridad pública es un pilar fundamental en cualquier sociedad, y el papel del personal jurídico de la Policía Estatal Preventiva es crucial en la prevención y combate del delito, la divulgación del nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, puede tener consecuencias profundas relacionadas con la privacidad, la seguridad y la normativa sobre protección de datos personales. La divulgación de nombres, currículos, cédulas profesionales y títulos involucra información personal protegida por leyes de privacidad. Estas leyes están diseñadas para salvaguardar los datos personales de los individuos y evitar su uso indebido, se vulneraría la seguridad y protección del personal, aunque el personal jurídico no sea operativo, su vinculación directa con la estructura orgánica de la Policía

Estatal Preventiva los hace potencialmente vulnerables a amenazas y actos de represalia. Al proteger su identidad, se les brinda una capa adicional de seguridad y se previene cualquier riesgo potencial a su bienestar personal y el de sus familias. Se violaría la confidencialidad debido a su rol dentro de las instituciones de seguridad, el personal jurídico, aunque no interactúe directamente con actividades operativas, juega un papel crucial en el Sistema de Seguridad Pública, los procesos legales en los que están involucrados pueden generar sensibilidad o controversia, es por ello que, mantener su información confidencial asegura que puedan llevar a cabo sus funciones sin influencias externas ni presiones indebidas. Aunque el personal jurídico no participa directamente en operaciones de campo, son parte integral de la estructura que apoya las actividades de la policía, al revelar sus identidades y detalles personales como sus currículos y cédulas profesionales, se corre el riesgo de exponerlos a amenazas o represalias. El bienestar y la seguridad del personal son prioridades fundamentales, y mantener su información confidencial es crucial para protegerlos. La información personal y profesional, como cédulas profesionales y títulos, es considerada información sensible. Su divulgación sin el consentimiento adecuado puede suponer incumplimientos legales en protección de datos personales amparados por leyes de privacidad que protegen a los individuos de la exposición indebida. El personal jurídico desempeña un papel vital en el mantenimiento de la legalidad y la justicia. Su seguridad y capacidad para operar sin influencias externas son esenciales para asegurar que el Sistema de Seguridad Pública funcione de manera imparcial y efectiva. La exposición innecesaria podría comprometer la integridad física, la vida y salud del personal Jurídico, así también, la integridad de casos legales y procedimientos judiciales. Organizaciones relacionadas con la seguridad pública, siguen estrictas normas de privacidad diseñadas para proteger a todos los empleados de un ente público, es el caso de la Policía Estatal Preventiva que, se asegura de que solo la información necesaria y apropiada sea divulgada al público. Esto no solo protege al personal, sino también la integridad de todo el sistema. La entrega de información del cuerpo jurídico, vulnera normativas internas y políticas de seguridad, ya que las organizaciones, especialmente las relacionadas con la seguridad pública, mantenemos políticas estrictas que prohíben la divulgación de información sobre su personal para proteger su integridad. Por tanto, cumplir con estas normativas es esencial para el buen funcionamiento de la institución y para proteger a nuestros miembros. En concreto, reservar dicha información, evita la intimidación y el mal uso de la información, la divulgación de esta información podría llevar a situaciones de hostigamiento o intimidación, tanto en un entorno físico como virtual. Además, la información podría ser mal utilizada para fines ilegítimos, lo que resalta la importancia de preservar no solo la privacidad y seguridad del personal jurídico, sino también de garantizar el funcionamiento efectivo y seguro de todo el esquema de justicia y del Sistema de Seguridad Pública al que pertenecen frente al alto índice de violencia que se vive en la Entidad. La información relacionada con la formación y experiencia profesional de los servidores públicos debe ser protegida bajo principios de protección de datos sensibles. Divulgar información que pueda ser utilizada para identificar o vulnerar a estos profesionales puede ser considerado una falta grave en términos de derechos humanos y protección legal. Pone en riesgo no solo a los servidores públicos del cuerpo jurídico adscritos a la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sino también pone en riesgo a la ciudadanía, pues se comprometerían las funciones de seguridad que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentra obligada a garantizar en coordinación con los Municipios y la Federación, respecto a las obligaciones enmarcadas en la normatividad ya citada en el presente acuerdo. La transparencia es importante, pero la seguridad de quienes arriesgan su vida por la sociedad debe ser la prioridad, dado que la entrega de esta información puede sentar un precedente peligroso. Si se accede a estos datos, otros sectores de la policía y funciones en posiciones delicadas, podrían exigir también la divulgación de sus identidades, creando un riesgo generalizado para la seguridad de todos los miembros que forman parte de la estructura orgánica de esta institución policial en sus distintas funciones y competencias.

Así pues, la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de sus unidades administrativas, es la autoridad encargada de salvaguardar la seguridad pública dentro del Estado de Colima. Esto implica toda actividad que conlleve servicios de protección y vigilancia, tal como evitar que se cometan crímenes, hacer respetar las leyes y reglamentos, proteger a las personas y sus bienes, detener infractores, investigar a presuntos responsables de delitos, así como toda actividad relacionada con servicios de protección y vigilancia.

En este sentido, para hacer demostrable el daño, sirve de apoyo el análisis estadístico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nominado "En Números Documentos de Análisis y Estadística Policías Abatidos: El Riesgo de Servir a la Seguridad Pública en México", mismo que puede ser consultable en la siguiente liga de acceso: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463901884.pdf

Análisis que a grandes rasgos señala que, por la naturaleza de sus funciones, los servidores públicos que en ellas prestan sus servicios corren el riesgo de ser abatidos.

En México de 2013 a 2018, 802 policías fueron asesinados mientras cumplían sus funciones. En consecuencia, es conveniente procurar ampliar el conocimiento de este fenómeno a través de información estadística que apoye la mitigación de las múltiples causas que lo originan, de tal forma que se garantice tanto la seguridad de las personas, como la capacidad del Estado Mexicano de ejercer propiamente el uso de la fuerza contra quienes perturben la paz pública.

En un Estado, es indispensable que el gobierno provea de seguridad, es decir, que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos y estén libres de amenazas que atenten contra su integridad y su propiedad.

La policía es la organización formada por funcionarios, quienes son los encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos, mediante el uso de mecanismos preventivos, disuasivos y correctivos que pueden implicar el uso de la fuerza (UNODC, 2010).

Entonces en el cumplimiento del deber de la policía implica salvaguardar la integridad y el orden público interno; es decir, deben impedir que se perturbe la tranquilidad ciudadana al prevenir, detectar e investigar delitos (Delgado, 1993; Beccaria, 2004; Sozzo, 2008).

Están constreñidos en su uso de fuerza por las leyes, ya que deben de garantizar el orden social sin afectar los derechos individuales de los ciudadanos (Delgado, 1993). En esta tarea tan importante de velar por la seguridad de los habitantes, los oficiales de policía se exponen a situaciones de estrés y peligro que, en ocasiones, pueden resultar mortales (Lester, 1984; Cardarelli, 1969; Kaminski, et al 2012). Dicho en otras palabras, por la naturaleza misma de sus funciones, los policías se enfrentan al riesgo de ser abatidos.

Un policía abatido, es aquel que, durante el cumplimiento de su deber, es víctima de homicidio. Es importante mencionar que hay tres elementos clave en esta definición:

1. Debe ser un servidor público cuya principal tarea sea proveer seguridad pública, mediante la prevención del delito y el combate al mismo.
2. Debió haber perdido la vida por acción dolosa.
3. Es factible acreditar que la acción dolosa en su contra es consecuencia del desempeño de sus labores.

Luego entonces, un individuo, por el hecho de pertenecer a una institución de seguridad pública, representa un riego que implica, poner en un estado de vulnerabilidad su vida, integridad, seguridad y salud, mayor es el riesgo para el personal jurídico adscrito a la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, máxime si se hace pública la información relacionada con el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica adscritos a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos. Es fundamental entender que la protección de la información personal de los integrantes del cuerpo jurídico de la policía es una cuestión de seguridad. Estas personas desempeñan un papel crucial en la justicia y la legalidad, y su exposición puede poner en riesgo no solo su vida, sino también la de sus familias. En contextos donde la corrupción y el crimen organizado son amenazas reales, mantener el anonimato de quienes trabajan en la defensa de la ley es una medida necesaria para preservar la integridad del sistema. La transparencia es importante, pero la seguridad de quienes arriesgan su vida por la sociedad debe ser la prioridad. La exposición de la identidad y formación del personal jurídico podría comprometer la integridad de los procesos judiciales. Si las partes involucradas en un caso conocen la identidad de los abogados y asesores legales, esto puede influir en su comportamiento y las decisiones que tomen, creando un ambiente de presión por grupos de la delincuencia hacia el cuerpo jurídico de las instituciones de seguridad adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública en el cumplimiento de sus funciones, encaminadas a garantizar a la ciudadanía sus derechos fundamentales de paz y seguridad.

Así pues, es de señalarse que es del conocimiento público, de los ataques que personal jurídico y administrativo encargado de la representación, defensa y asesoría jurídica pertenecientes a las instituciones de seguridad adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha recibido en el ejercicio de sus funciones, mismas que se transcriben para mayor ilustración y soporte jurídico a lo aquí argumentado.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2018/3/21/ejecutan-funcionario-del-cereso-de-colima-al-llegar-su-domicilio-201929.html

Ejecutan a funcionario del Cereso de Colima al llegar a su domicilio

Por Pedro Zamora Briseño
miércoles, 21 de marzo de 2018 · 10:22

COLIMA, Col. (apro).- Javier Álvarez León, subdirector jurídico del Centro de Reinserción Social (Cereso), fue asesinado a balazos la noche del martes después de llegar a su domicilio, en la zona oriente de esta ciudad. Se trata del quinto servidor público ultimado en el periodo de poco más de dos años del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez. Antes, corrieron la misma suerte el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jaime Ernesto Vázquez Montes, el 6 de julio de 2016; Daniel Cortés Carrillo, director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Manzanillo (CAPDAM), el 9 de agosto de 2017; Crispín Gutiérrez Moreno, presidente municipal de Ixtlahuacán, el 20 de octubre de 2017; y Martín Cázares Zárate, regidor del Ayuntamiento de Tecomán, el 20 de febrero de 2018. A lo largo de ese lapso también han ocurrido los homicidios de alrededor de una decena de agentes policiacos estatales, municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). **De acuerdo con las primeras versiones, el asesinato del subdirector del Cereso ocurrió poco después de las 8:00 de la noche del martes 20, al ser sorprendido por pistoleros que presuntamente lo esperaban a bordo de una motocicleta afuera de su domicilio, en la calle Veracruz de la colonia Jardines del Sur. La víctima habría recibido al menos cuatro balazos, que le causaron la muerte en el lugar de los hechos. El cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que peritos y agentes de la PGJE registraron y recogieron evidencias de la escena del crimen. Los asesinos huyeron y horas después la PGJE no había informado de los hechos ni de la eventual detención de los asesinos.**

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/10/14/asesinan-al-director-del-cereso-de-colima-su-escolta-273909.html

Por Pedro Zamora Briseño
jueves, 14 de octubre de 2021 · 16:23

Asesinan al director del Cereso de Colima y a su escolta
El director del Cereso de Colima y su escolta fueron asesinados la madrugada de este jueves, mientras que la esposa del funcionario resultó herida; también murió uno de los supuestos atacantes.

COLIMA, Col. (apro).– La madrugada de este jueves fueron asesinados el director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, Román Buenrostro Campos, y un policía estatal que fungía como su escolta; además, la esposa del funcionario resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Durante los hechos, ocurridos entre las calles Cuarzo y Lapislázuli de la colonia Villa Flores, en el municipio conurbado de Villa de Álvarez, también murió uno de los pistoleros, alcanzado por los disparos del escolta al repeler el ataque.

En un mensaje difundido la mañana de este jueves, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares y amistades de las víctimas, a quienes dijo extender todo el apoyo para hacer frente a esa situación.
Confirmó que "en este condenable hecho, se abatió a uno de los implicados, por lo que instruí a la Secretaría de Seguridad Pública a colaborar con la Fiscalía General del Estado hasta dar con el resto de los responsables".
Mediante un comunicado, la SSP estatal señaló que después de los hechos en los que el funcionario y su escolta fueron "cobardemente asesinados", la Policía Estatal, en coordinación con otras dependencias de seguridad, implementaron un operativo para localizar a los sujetos que participaron en el ataque.
Según versiones extraoficiales, el suceso ocurrió en los primeros minutos de este día en el exterior de una tienda de abarrotes que era propiedad de Buenrostro Campos, quien en ocasiones era visto en el lugar atendiendo a los clientes.

El titular del Cereso tenía menos de 15 meses de haber asumido el puesto, el 17 de julio de 2020, en el que fue nombrado dos meses después de un motín en el que fueron asesinados tres reos y 15 resultaron heridos.
En los años recientes, como resultado de enfrentamientos de grupos rivales del crimen organizado, abundan los brotes de violencia en torno a los centros penitenciarios de la entidad, particularmente el Cereso de Colima, que han cobrado la vida de presos, custodios y directivos.
El 20 de marzo de 2018, Javier Álvarez León, subdirector jurídico del Cereso de Colima, fue asesinado a balazos después de llegar a su domicilio, en la calle Veracruz de la colonia Jardines del Sur.
La víctima recibió al menos cuatro balazos, que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.
Posteriormente, un custodio del Cereso de Colima fue asesinado, dos trabajadores penitenciarios resultaron heridos y el domicilio de uno más fue baleado, en hechos ocurridos en diferentes puntos de la ciudad a principios de diciembre de 2019.
Antes, el 18 de abril, un recluso murió y siete más resultaron heridos durante una riña entre reos provenientes de grupos delictivos rivales. La SSP estatal informó que el fallecimiento del reo se produjo al ser agredido con "un objeto hechizo punzocortante", mientras que dos internos heridos fueron trasladados a un hospital y cinco más sufrieron "golpes leves" que fueron atendidos en el área médica del reclusorio.
Mientras tanto, en octubre siguiente dos reos fueron encontrados muertos en el exterior de uno de los dormitorios del Cereso, quienes habían sido recluidos por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud. Sus cuerpos se encontraban semienterrados.
El 5 de febrero de 2020, diez internos y un custodio heridos fue el saldo de una riña ocurrida en este mismo Cereso, luego de un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos.

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/05/14/estados/ataque-contra-patrulla-deja-un-policia-muerto-en-colima-7530

Ataque contra patrulla deja un policía muerto en Colima

Los cuatro elementos que sufrieron el ataque en la autopista Colima-Guadalajara fueron trasladados a recibir atención médica; uno de ellos perdió la vida. Foto Cuartoscuro / Archivo

Juan Carlos Flores, corresponsal
14 de mayo de 2024 10:17

Colima, Col. Un policía estatal asesinado y otros tres heridos es el saldo de un ataque armado contra una patrulla de esta corporación en la autopista Colima-Guadalajara este martes.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno del estado de Colima, los hechos se produjeron cerca de las 8 de la mañana cuando un vehículo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue interceptado por un comando armado y disparó sus armas contra el vehículo.

"La SSP lamenta profundamente y condena el atentado que sufrieron esta mañana cuatro elementos de la Policía Estatal; asimismo, informa que colabora con diversas instituciones estatales y federales en un amplio operativo para dar con las personas responsables", establece el comunicado.
Los cuatro elementos que sufrieron el ataque fueron trasladados a recibir atención médica; uno de ellos perdió la vida.
"La SSP trabaja de manera coordinada en el operativo implementado para dar con los autores del condenable hecho; en dicho operativo además de la Policía Estatal participan la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN)".
Con este homicidio, cuarenta y tres policías han sido asesinados durante la gestión de la gobernadora de Morena, Indira Vizcaíno Silva.

https://elcomentario.ucol.mx/?p=89561

Condena SSP atentado contra policías; despliega operativo para capturar a responsables

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del estado lamentó y condenó el atentado que sufrieron este martes 14 de mayo los 4 elementos de la Policía Estatal. Los hechos ocurrieron en el tramo carretero conocido como La Salada, en la autopista Colima-Manzanillo.

Según refiere la dependencia en un comunicado de prensa, los 4 elementos agredidos fueron trasladados para recibir atención médica; desafortunadamente, uno de ellos perdió la vida.

Asimismo, la SSP informa que colabora estrechamente con diversas instituciones estatales y federales en un amplio operativo para dar con las personas responsables. En dicho operativo participan la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN).

La SSP trabaja de manera coordinada en el operativo implementado para dar con los autores del condenable hecho.

Es por todo lo anterior que, se considera viable y procedente la reserva, en razón del clima de inseguridad que se percibe en el Estado de Colima, debido a que puede poner en riesgo inmediato e inminente la integridad física, la vida, salud y seguridad de los servidores públicos que ejercen sus funciones dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, en virtud de que se trata de información del personal encargado de la representación, defensa y asesoría jurídica vinculados directamente a la estructura orgánica de la Policía Estatal Preventiva, institución encargada de garantizar el orden, la paz y seguridad pública, por lo que se considera mayor el daño que puede causar al revelar que el interés público de conocerla. En este mismo sentido implicaría que la delincuencia organizada este en aptitud de causar daños, así como de cometer delitos que constituyan amenazas, al conocer datos

De lo descrito, resalta la importancia de respetar la reserva, así como salvaguardar en todo momento los derechos a la vida, salud y seguridad de los servidores públicos que realizan funciones jurídicas dentro de las instituciones de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, tendientes a garantizar de manera directa la Seguridad Pública, a través de acciones preventivas y correctivas, encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones, resultando evidente que el riesgo de entregar la información es mayor que las ventajas de su difusión, ya que el derecho a la vida es un derecho *sine qua non* para la existencia de otros derechos, por lo que la medida de clasificar como reservada la información es el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio que causaría con la entrega de la información.

TERCERO. - Reserva total de: El nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica adscritos a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos.

CUARTO. - Plazo de reserva: Los documentos materia de la reserva tendrán el carácter de reservados por el plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de emisión del presente acuerdo, sin perjuicio de que el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo, pueda ampliar el plazo de reserva en los términos del artículo 110 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

QUINTO.- Autoridad responsable de su conservación: Será responsable del resguardo y protección de la información reservada la Secretaría de Seguridad Pública, así como cualquier otra Dependencia que se encuentre vinculada con el archivo, resguardo o ejecución, por lo que en los términos del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se deberá disponer lo necesario a efectos de que los documentos reservados sean debidamente custodiados y conservados, debiendo observar los lineamientos que expida el Sistema Nacional de Transparencia.

Dado en la Ciudad de Colima, Colima, en las oficinas de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, a los 23 días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro.

ATENTAMENTE. **C. TENIENTE DE FRAGATA ANA KAREN ANDRÉS RODRÍGUEZ. SUBSECRETARIA DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. RÚBRICA.**

3.-ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

Del estudio y análisis del asunto en cuestión, se desprende que la Clasificación de Reserva de la Información emitida por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, obedece al cauce natural que se deriva de una interpretación literal de la legislación que rige nuestras actuaciones.

En este sentido para mejor proveer en la argumentación del asunto en cuestión, es indispensable establecer los mecanismos necesarios para que toda persona pueda tener acceso a la información pública, mediante procedimientos sencillos y expeditos, pero al mismo tiempo vigilar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como la información reservada o confidencial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Estableciendo las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente, todos ellos son elementos que debemos de ponderar en la solución y respuesta a los planteamientos concretos de la ciudadanía en las solicitudes de información.

No obstante, lo anterior este Pleno establece que, si bien es cierto, la sociedad puede requerir hacerse conocedora de información relativa al nombre de todos los integrantes de la Unidad de Asuntos Jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos.

En este sentido, cabe destacar que este Comité es un ente garante del derecho constitucional de acceso a la información, sin embargo no debe perderse de vista que de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 106, 110, 114 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así también en lo previsto en el Capítulo Quinto, párrafo décimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, el derecho constitucional de acceso a la información pública puede ser restringido cuando se trate de información clasificada, por razón de seguridad pública, ponga en riesgo la

vida, la seguridad de los servidores públicos, o bien el daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocerla.

Luego entonces, en nuestra Carta Magna, se establece que el derecho de acceso a la información no es absoluto y encuentra sus límites en virtud del interés público, la vida privada y el derecho a la protección de la vida, misma limitación que debe vincularse con la realización de una prueba de daño, por lo que este Comité coincide con el sujeto obligado con la aplicación al caso en concreto de la siguiente tesis que se transcribe al tenor literal siguiente:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2000234
Instancia: Primera Sala

Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 1a. VIII/2012 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 656
Tipo: Aislada

INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden

clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.
Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Aunado a lo anterior, del estudio y análisis del asunto en cuestión se desprende que la determinación de reserva de información emitida por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública se ajusta a lo señalado por el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, toda vez, que el acuerdo adoptado por la misma se ajusta a las causales de reserva contempladas en el artículo 11 y en las fracciones I, II, IV, IX y XI del artículo 116, todos de la citada Ley, así como en lo dispuesto en el Capítulo Quinto, párrafo décimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información .

En este sentido, la citada reserva de Información se encuentra debidamente fundada y motivada, citándose al efecto las disposiciones jurídicas aplicables de la Ley de Transparencia que autorizan el principio de excepción a la divulgación de la información solicitada, encuadrándose al efecto las normas con los hechos, circunstancias y motivos del caso concreto; consecuentemente, se demuestra que la información encuadra en las hipótesis de reserva previstas en la ley, concretamente en la contenida por las fracciones I, I, IV, IX y XI del artículo 116 de la ley de la materia; así como de lo previsto en el Capítulo Quinto, párrafo décimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas y se determina a través de la prueba de daño del perjuicio que puede producirse con la liberación de la información, toda vez que de proporcionarse dicha información comprometería las funciones de seguridad pública que la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentra obligada a garantizar en coordinación con los municipios y la federación; esto es así, debido a que la información que se solicita consiste en la entrega del nombre de todos los integrantes de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, derivado de lo anterior expuesto es de entenderse que de dar a conocer la información se pone en peligro

las funciones que realizan los servidores públicos que integran la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, particularmente del personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y homólogos de la Subsecretaría de Operaciones, ya que se vulneraría la integridad personal de los integrantes que prestan sus servicios para la defensa jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, también así al vincular las funciones del personal que integra la Unidad de Asuntos u Homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones, y que de hacerse pública dicha información, comprometería las funciones de seguridad pública que las instituciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentra obligadas a garantizar en coordinación con los Municipios y la Federación; esto es así, debido a que la información que se solicita se entregaría el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, es decir, personal en funciones de seguridad pública y que cada uno ellos, en el ámbito de su competencia, realiza para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, colocando a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en un estado de vulnerabilidad la difusión de tal información, respecto de datos sensibles del personal que es parte de la estructura orgánica de esta institución Policial para atender las obligaciones enmarcadas en el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, toda vez que se considera viable y procedente dicha reserva mencionada con antelación, en razón del clima de inseguridad que se percibe actualmente en el Estado de Colima, más aun siendo que el personal jurídico quien da acompañamiento al personal operativo a manera de legalidad para las puestas a disposición de las personas detenidas, situación que los hace identificables, y más aún teniendo acceso a sus nombres, y datos personales contenidos en el título, cedula profesional, currículum y demás anexos que acrediten sus grados académicos, información que de proporcionarse pone en riesgo su integridad física, salud, vida y seguridad, máxime

que dicha información se encuentra reservada por disposición expresa de una ley, sin que ello contravenga los principios y disposiciones establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como las previstas en tratados internacionales.

Al efecto, las fracciones I, II, IV, IX y XI, del artículo 116 de la Ley de Transparencia referida establecen:

> *"Artículo 116.- Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán emitir lineamientos para clasificar como reservada información que se encuentre a su disposición con motivo del ejercicio de su cargo, o podrán ejercer dicha función por medio de las instancias que se determinen en los reglamentos o acuerdos administrativos que dicten.*
>
> *En todo caso, el acuerdo correspondiente deberá fundar y motivar la reserva, a través de la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 111 de esta ley, cuando la publicación de la información actualice cualquiera de los siguientes supuestos:*
>
> *I.- Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*
> *II.- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;*
> *IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*
> *IX. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que por su publicación pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros;*
> *XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales."*

Así como lo previsto en el Capítulo Quinto, párrafo décimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, el cual a su letra establece:

> *De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la federación, la ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como el mantenimiento del orden público.*
> *... "así mismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocerla capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.*

En ese sentido este Comité de Transparencia coincide con el Acuerdo de Clasificación de Reserva realizado por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, mismo que se encuentra ajustado a derecho,

pues en la especie se actualizan los supuestos de clasificación antes transcritos, puesto que se pretende proteger el interés público de la procuración preventiva de la seguridad a favor de los servidores públicos integrantes de la unidad de asuntos jurídico u homólogos de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que de proporcionarse la información consistente en el nombre de todos los integrantes de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, información que de proporcionarse pone en riesgo no solo a los servidores públicos jurídico administrativos adscritos a la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sino también pone en riesgo a la ciudadanía, pues se comprometería las funciones de seguridad pública que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentra obligada a garantizar en coordinación con los Municipios y la Federación, obligaciones enmarcadas en la normatividad ya citada en el presente acuerdo, motivo por el cual la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados a favor de cada individuo.

Cabe destacar que lo mencionado con antelación, se sustenta con fundamento en el Capítulo II, primer párrafo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y Desclasificación de la información, así también como para la Elaboración de Versiones públicas, con relación al título Sexto Capitulo I, artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ya que de proporcionar la información que nos ocupa, se vulneraría así no sólo a los servidores públicos adscritos a la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente a los integrantes de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, sino también pone en riesgo a la ciudadanía, la estabilidad del Estado, pues se comprometería las funciones de seguridad pública que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentra obligada a garantizar en coordinación con los Municipios y la Federación, y que grupos delincuenciales pondría en riesgo la seguridad del Estado, anulando, impidiendo y obstaculizando la actuación de los servidores públicos que se desempeñan como integrantes de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública.

En razón de lo anterior este órgano garante coincide con lo establecido por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, toda vez que al revelar dicha información se vulnera la integridad personal de los integrantes de la defensa jurídica de la Subsecretaria de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que dicho personal es una pieza importante dentro de la función de garantizar la seguridad, mediante el uso de mecanismos jurídico-administrativos, mismos que desempeñan sus funciones para la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, que de proporcionarse dicha información, pone en riesgo su integridad física, salud, vida y seguridad, ya que dicho personal de la unidad de asuntos jurídico de dicha dependencia, ya que por el entorno en el que se encuentran pueden sufrir algún ataque directo, alguna represalia o amenazas derivado de las funciones que desempeñan, por lo que de proporcionarse dicha información se estaría anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que integran la unidad de asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, destacando que dicha información es de carácter reservado, y que de proporcionarse **se comprometería la integridad física, la salud, seguridad y vida de los mismos, toda vez que como se menciona con antelación, ya que de proporcionarse dicha información hace plenamente identificables a los integrantes de asuntos jurídicos u homólogos y que al tener acceso a dicha información puede poner en cierto riesgo de vulnerabilidad a dicho personal ya que los hace susceptibles de algún ataque directo, amenaza o represalia en su contra, y al facilitar la misma y hacer pública dicha información provocaría un grave daño, toda vez que su divulgación se traduciría en un insumo de utilidad para los grupos delictivo, es decir particularmente, se estaría exponiendo información de gran relevancia como la que se contiene dentro de los documentos que refiere en la solicitud de información, misma que pudiera hacer localizable a dicho personal y ponerlo en estado de vulnerabilidad en llegar dicha información en manos de un tercero, que pudiera hacer mal uso de la información,** razón por la que se podría colocar en primera instancia por parte de la delincuencia organizada, como uno de los aspectos más importantes a considerar, ya que dar a conocer los mismos se estaría poniendo en riesgo la salud, la integridad, la seguridad y la vida derechos de los servidores públicos que integran

la unidad de asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Operaciones integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, configurándose un daño presente, probable y específico como a continuación se señala:

DAÑO PRESENTE: Al momento de analizar la determinación de Clasificación de Reserva realizada por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y la argumentación expuesta en ella es importante tener en consideración la problemática en materia de seguridad que se vive en la actualidad de nuestro país y especialmente en el Estado de Colima, motivo por el cual desde la Administración Estatal y específicamente a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, se han intensificado las acciones para combatir la delincuencia que en muchas de las ocasiones no es generado por personas que actúan a manera individual, si no que pertenecen a grupos de la delincuencia organizada de niveles trasnacionales, con grandes capacidades en cuanto a capital económico, humano y tecnológico; grupos que resultan directamente afectados por el trabajo que se realiza por la Secretaría de Seguridad Pública y que han demostrado que en represalia a acciones directas cómo detenciones de algunos de sus miembros o aseguramientos de droga, armas o bienes que les pertenecían o simplemente para evitar que las acciones de las fuerzas de seguridad afecten su optimo funcionamiento; no se detienen en ordenar y ejecutar acciones violentas en contra de la integridad y vida del personal que labora para la Policía Estatal Preventiva tal y como se ha demostrado con la pérdida de vidas humanas que laboraban para esa institución, mismas que la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de seguridad pública mediante su acuerdo, menciona algunas de las pérdidas humanas que se han tenido en fechas recientes, así como con diversos ataques directos y/o enfrentamientos mismos que son de conocimiento público, con ello cabe destacar que esta en constante riesgo tanto el personal que ejerce funciones operativas como administrativas en este caso particular al hacer pública la información en materia de la reserva, pondría en riesgo inmediato al personal integrante de asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, y que de proporcionarse los haría plenamente identificables, ello toda vez que como se menciona con antelación el personal jurídico son los encargados del apoyo al personal operativo a manera de legalidad para las puestas a disposición de los detenidos,

acción que los hace plenamente identificables y como consecuencia de ellos, estarían en estado de vulnerabilidad y que los mismos pueden estar expuestos a algún ataque directo, amenazas o represalia que pudieran sufrir a consecuencia de hacer pública la información consistente en los nombres de todos los integrantes de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la policía estatal preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cédula, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, ya que como se menciona en supra líneas dicha información los puede hacer plenamente identificables poniendo así en riesgo su integridad física, salud, vida y seguridad; razón por la cual este pleno, derivado de un análisis realizado a los notas periodística que hace mención la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto a ataques que han cobrado la vida de personal jurídico pertenecientes a dependencias de Seguridad es por lo que este Comité considera que dicha información es completamente de carácter reservado, evitando poner en riesgo en todo momento la vida, seguridad y salud del personal que integra la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública; esto viene a colación en virtud de que para realizar estas acciones los grupos delincuenciales han demostrado que en la mayoría de las ocasiones estos ataques a los que se ha hecho referencia, traen con anterioridad un trabajo de preparación que realiza la delincuencia para cumplir su cometido, dentro de esta preparación se encuentran las labores de investigación y vigilancia hacía el personal que labora en la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir tanto el personal que desempeña funciones operativas como administrativas están en un riesgo real e inminente toda vez que, al proporcionarse dicha información se estaría proporcionando información relevante como sus nombres, información contendida en títulos profesionales, cedulas profesionales, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, información muy valiosa que en manos de la delincuencia organizada los pondría en un peligro extremo y por ende, pudiera así con ese tipo de especificaciones de la información poner en riesgo la integridad física, vida, salud, seguridad de los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones.

Lo anteriormente expuesto se acredita con lo dispuesto en el Capítulo Quinto, párrafo vigésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y

desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, que a la letra señala.

> **Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Es por lo anterior que este comité coincide con el criterio emitido en el Acuerdo de Clasificación de Reserva realizado por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sentido de la reserva de la información el nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la policía estatal preventiva en la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cedula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, ya que como se menciona con antelación se estaría vulnerando la integridad, la vida y seguridad del personal que labora en la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente al personal encargado de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que de proporcionarse estaría revelando información muy sensible, es decir se pondría en riesgo inminente la integridad personal mencionado con anterioridad, por lo que la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y este pleno tiene la obligación de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos consignados para cada individuo, por lo que de divulgar la información relacionada con los nombres, títulos, cédulas profesionales, currículum y anexos que acrediten los grados académicos de todos los integrantes de asuntos jurídicos u homólogos de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo así mayor el daño que el interés público de conocer la citada información, pues es evidente que el derecho a la vida tiene mayor valor que cualquier otro derecho incluyendo el interés público de conocer la información que nos ocupa. En ese orden de ideas este comité respalda plenamente lo dicho por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y reitera en su obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos consignados en favor de cada individuo incluyendo claramente a su personal tanto administrativo como operativo.

De igual manera se coincide con el criterio del acuerdo de reserva que nos ocupa en el sentido de que dé en el supuesto de que la información requerida llegue a poder de estos grupos de la delincuencia organizada los mismos se verían beneficiados para realizar acciones que anulen, impidan y obstaculicen las funciones de Seguridad Publica que en la institución se realizan vulnerando así además un interés colectivo social cómo lo es la seguridad pública.

DAÑO PROBABLE: Dar acceso a la información coloca en grave riesgo la integridad física, la vida, salud y la seguridad del personal de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente de los integrantes de los asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Debido al riesgo que este tendría al entregar dicha información, ya que de ser así se generaría un riesgo real e inminente que podría en vulnerabilidad la integridad física, salud, vida y seguridad de dicho personal ya que por el hecho de pertenecer a una institución de seguridad pública, representa un riego que implica, poner en un estado de vulnerabilidad su vida, integridad, seguridad y salud, mayor es el riesgo para las los integrantes de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones Secretaría de Seguridad Pública del Estado, máxime si se hace pública la información relacionada con los nombres, títulos, cédulas profesionales, Currículum y anexos que acrediten los grados académicos de todos los integrantes de la unidad mencionada con antelación, información que haría plenamente identificable a dicho personal, por lo que este comité con la intención de poner en riesgo a mencionados servidores públicos, concuerda con lo dicho por la Subsecretaría de Operaciones toda vez que se busca evitar la intimidación y mal uso de la información, ya que al hacerse publica dicha información podría llevar a los mismos a situaciones de hostigamiento o intimidación tanto en un entorno físico como virtual, y por ende también pone en riesgo su integridad física, vida y seguridad exponiéndolos también a recibir un ataque directo, represalia y amenazas.

DAÑO ESPECÍFICO: Se considera que de proporcionar la información respecto al nombre de todos los integrantes de la unidad de asuntos jurídicos u homólogos encargados de la defensa y asesoría jurídica de la policía estatal preventiva en la Secretaría de Seguridad Pública, copia del título y cedula profesional, currículum y anexos que acrediten sus grados académicos, información que forma parte de la base de datos de dicha dependencia, en términos del artículo 105 y 106 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, y que de divulgarse pondría en grave riesgo directamente en contra de dicho personal así como también a la ciudadanía, pues comprometería las funciones de seguridad pública, cabe resaltar que la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de sus unidades administrativas, es la autoridad encargada de salvaguardar la seguridad pública del Estado de Colima, lo anterior conlleva servicios de protección y vigilancia, tal como evitar que se cometa algún crimen, hacer respetar las leyes y reglamentos, proteger a las personas y sus bienes, detener infractores, investigar a presuntos responsables de delitos, así como toda actividad relacionada con servicios de protección y vigilancia.

Destacando que existe riesgo total tanto para el personal operativo como para el personal administrativo que integra una dependencia de seguridad, ya que con el hecho de formar parte de una dependencia de seguridad, implica estar en riesgo su integridad física, vida, salud y seguridad, es decir siempre habrá un riesgo, más aún al proporcionarse u otorgase información como nombres y demás información especifica como la que podemos localizar por ejemplo en un currículum información que de encontrarse en manos de terceros que pudieran hacer mal uso de ella, o de llegar a manos de la delincuencia organizada, generaría poner en grave riesgo a dicho personal exponiéndolos a sufrir amenazas, represalias en su contra, ataques directos u algún otro delito que pudieran cometer en contra de los integrantes encargados de la defensa y asesoría jurídica de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, mencionando como punto importante que ya ha habido la perdida de varias vidas humanas de personal que se desempeñaba como jurídico en dependencia de seguridad, considerando este órgano garante que se considera viable mantener la reserva de la información, ello en razón del clima de inseguridad que se percibe en el Estado de Colima, debido a que puede poner en riesgo inmediato e inminente la integridad física, la vida y seguridad del personar servidor público de la Subsecretaría de Operaciones, particularmente de los encargados de la defensa y

asesoría jurídica de la SSO, resultando evidente que el riesgo de proporcionar la información es mayor que las ventajas de su difusión, pues es evidente que el derecho a la vida tiene mayor valor que cualquier otro derecho incluyendo el interés público de conocer la información que nos ocupa.

Lo anterior mencionado conforme en lo dispuesto en la fracción VII, artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y correlativo en la fracción I, II, IV, y XI, del artículo 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, mismos que a su letra dicen...

> ***Artículo 113.-*** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*
> *VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos.*

> ***Artículo 116.-*** Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán emitir lineamientos para clasificar como reservada información que se encuentre a su disposición con motivo del ejercicio de su cargo, o podrán ejercer dicha función por medio de las instancias que se determinen en los reglamentos o acuerdos administrativos que dicten. En todo caso, el acuerdo correspondiente deberá fundar y motivar la reserva, a través de la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 111 de esta ley, cuando la publicación de la información actualice cualquiera de los siguientes supuestos:
> I.- Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
> II.- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física
> IV.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
> XI.- Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales.

Así también en lo dicho en lo dispuesto de conformidad con el contenido de la fracción VII, del artículo 113 de los Lineamientos Generales en materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

> *ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.*
>
> *CAPÍTULO V*
> *DE LA INFORMACIÓN RESERVADA*
>
> **Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.
>
> Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:
> I.- La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
> II.- Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
> III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

En este tenor, es claro que la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, cumplió con lo dispuesto en los artículos 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, los cuales disponen que los sujetos obligados dispondrán lo necesario a efecto de que los documentos que contengan información reservada sean debidamente custodiados y conservados, procediendo a realizar el acuerdo de reserva correspondiente debiendo estar debidamente fundado y motivado, acreditando a través de la aplicación de la prueba de daño la justificación

que de divulgarse la información se genera un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo para el interés público.

Se señala lo anterior, en virtud de que como quedo bien establecido, la Seguridad Pública es de interés general, entonces el concepto de interés público puede ser utilizado como restrictivo de diversos derechos ya que el interés público es aquello que es relevante para la mayoría en una comunidad específica, en un tiempo económico, político y social determinado, y, por tanto, es susceptible de ser tutelado por el Estado.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 28, 29, 51, 52, 53, 54, 57, 110, 112, 116, 128 y 129, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, este Comité de Transparencia procede a los:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. - Este Comité de Transparencia de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima es el Órgano Colegiado competente para conocer de la presente clasificación de información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 6° y 16 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos artículo 1º fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. - - -

SEGUNDO. - Este Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima **CONFIRMA la Clasificación de Reserva de Información,** emitida por la **Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima;** por el período máximo de cinco años de conformidad con el artículo 110 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la dependencia o Unidades Administrativas correspondientes, por conducta de la Unidad de la Subsecretaría de Operaciones. –

- - - Así lo resolvió y firman el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, por unanimidad de votos el **LIC. FRANCISCO JAVIER DELGADO BETANCOURT,** Subdirector General Jurídico del Sistema Estatal Penitenciario, **LICDA. MAYRA SEVILLANO GONZALEZ,** Secretaria Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y Miembro del Comité de Transparencia, y **LIC. ESTEFANIA NEGRETE MICHEL,** Jefa del Departamento de Atención Integral de la Subsecretaría de Operaciones y Miembro suplente del Comité de Transparencia, ante este comité.

- - - **MTRA. MARIA ELIZABETH LOPEZ GARCÍA,** Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima, quien autoriza y da fe.-

LIC. FRANCISCO JAVIER DELGADO BETANCOURT
Subdirector General Jurídico de la Dirección del Sistema Estatal Penitenciario y Presidente del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima

LICDA. MAYRA SEVILLANO GONZÁLEZ
Secretaria Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública y miembro del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima

LIC. ESTEFANIA NEGRETE MICHEL
Jefa del Departamento de Atención Integral de la Subsecretaría de Operaciones y Miembro suplente del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima.

MTRA. MARÍA ELIZABETH LÓPEZ GARCÍA
Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima.

La presente hoja de firmas corresponde al Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública **No. CTSPP/063/2024**.